



## SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, quince de junio de dos mil veintiuno

### **S19-287**

Proceso: ORDINARIO LABORAL- APELACIÓN AUTO.  
Demandante: **KATTY ALEJANDRA ÁLVAREZ RESTREPO**  
Demandado: **INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO**  
Radicado No.: 05001-31-05-012-2017-00049-01.  
Tema: Litis consorte necesario y facultativo  
Decisión: **CONFIRMA** auto que resuelve excepción

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la entidad contra el auto mediante el cual se resolvió desfavorablemente la excepción previa denominada *no comprender la demanda a todos los Litis consortes necesarios*.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 expedido el 4 de junio de 2020, en consonancia con los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 18** de discusión, que se adopta como auto, en los siguientes términos:

### **1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES**

#### **1.1. LO PRETENDIDO**

Solicita la demandante mediante este trámite que tras la declaratoria de la calidad de trabajadora oficial de la Institución Universitaria Pascual Bravo desde el 14 de mayo de 2013 y hasta el 9 de noviembre de 2015, cuando terminó la relación laboral de manera unilateral y sin justa causa, se ordene su REINTEGRO en iguales o mejores condiciones, o subsidiariamente pague la indemnización por despido injusto; además del reconocimiento de:

- La totalidad de salarios y prestaciones sociales legales, extralegales y convencionales, teniendo en cuenta el verdadero salario que debió devengar durante toda la relación laboral (lo que posteriormente denominó nivelación salarial) entre ellas: auxilio de

cesantías, intereses sobre las cesantías, los recargos por las jornadas extraordinarias de trabajo, vacaciones y prima de servicios.

- Los aportes a la seguridad social.
- La sanción por no pago oportuno de salarios y prestaciones.
- La sanción por la no consignación de las cesantías a un fondo.
- La indexación de las condenas.
- Y las costas del proceso.

En lo que interesa a la Sala, expuso que prestó sus servicios personales, en los extremos temporales ya referenciados, en la Institución Educativa Escuela Normal Superior Mariano Ospina Rodríguez ubicada en el Municipio de Fredonia - Antioquia, en virtud del poder subordinante de su empleador, quien tenía personal vinculado que desarrollaba sus mismas funciones (relacionadas con el aseo del lugar) pero aquellos devengaban una suma superior.

## 1.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtió la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO el derecho pretendido y, entre otras, propuso como excepción previa la que denominó *no comprender la demanda a todos los Litis consortes necesarios*, la que fundamentó en los siguientes términos:

La relación jurídico procesa, debe comprender necesariamente al Departamento de Antioquia, Secretaría de Educación Departamental, por (sic) ser estar en cabeza de este ente territorial la prestación del servicio público de educación básica media, de conformidad con la Ley 115 de 1994 y la Ley 715 de 2001, toda vez que la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO no es la única legitimada para ser parte dentro del presente proceso ordinario laboral, puesto que ésta Institución Universitaria es sólo un operador de dicha función, quien actúa sólo como ejecutor de unas obligaciones dentro del marco de los convenios interadministrativos números 4600000019, 46000000496 de 2013 y 46000000497 de 2013.

En este orden de ideas, se tiene que de conformidad con la ley 715 de 2001, la prestación del servicio de educación básica primaria y media, en los municipios no certificados por el Ministerio de Educación (sic) Nación en Antioquia, se encuentra en cabeza del respectivo Departamento, quien ejerce dicha función a través de las Secretarías de Educación Departamental, pues en el Departamento de Antioquia, sólo hay cinco municipios certificados, esto es, que tienen la competencia para prestar directamente los servicios de educación básica primaria y media, que son: Medellín, Turbo, Itagüí, Envigado, Sabaneta y Bello, de resto municipios como Fredonia Ant., dependen en un todo en lo que tiene que ver con el servicio de educación en el nivel básico primaria y media del Departamento de Antioquia.

En consecuencia, la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO, sólo es quien suscribe los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión del Departamento de Antioquia y no tiene una relación jurídica directa que lo vincule con la Institución Educativa ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ del Municipio de Fredonia Ant.

### **1.3. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA**

En audiencia celebrada el día 27 de agosto de 2019 el a quo resolvió desfavorablemente los medios exceptivos propuestos.

Dentro del término concedido por la ley, la entidad demandada interpuso y sustentó recurso de apelación contra el auto mediante el cual se rechazó la excepción previa denominada *no comprender la demanda a todos los Litis consortes necesarios*.

## **2. ARGUMENTOS**

### **2.1. DEL JUEZ PARA DECIDIR**

La determinación de quien está obligado a responder hace parte del litigio cuando se ha recaudado el material probatorio. Advierte que estos medios de defensa lo que buscan es sanear el proceso cuando la parte pasiva de la Litis no tiene capacidad para comparecer en tal calidad y ello impediría no sólo su intervención sino además la imposición de una eventual carga condenatoria lo que no ocurre en este evento por tratarse de un establecimiento público de educación superior con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente condiciones estas que le confieren plena capacidad para actuar y ejercer el derecho de defensa frente a las pretensiones incoadas en su contra.

Frente a la excepción puntual atacada advirtió que desde los hechos y pretensiones que se exponían en la demanda, resultaba evidente que estaban dirigidas contra la Institución Universitaria Pascual Bravo como empleadora en virtud de los contratos de prestación de servicios que afirmaba la demandante haber suscrito con dicha entidad, señalando que respecto de ella se configuraron todos los elementos de un contrato de trabajo. Que aunado a lo anterior, tampoco visualizaba en el líbelo genitor la exposición de una eventual solidaridad o sobre una intermediación laboral, caso en el que sí consideraría necesario integrar como Litis consorte al Departamento de Antioquia de conferírsele la calidad de beneficiario de la actividad ejercida por la actora.

Que no desconocía los argumentos ventilados en la contestación donde se tildaba a la Institución Educativa ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ del Municipio de Fredonia, como beneficiaria de las labores realizadas por la señora Alejandra Álvarez, en virtud de lo cual se sugería la vinculación de la entidad territorial departamental como responsable de

las obligaciones surgidas. Empero, considera que su acogimiento implicaba un entendimiento alejado de lo expresado por la accionante, y no correspondía con su genuino sentido, punto en el que destaca que de manera suficiente había sido decantado por vía jurisprudencial la facultad del trabajador de demandar sólo al contratista independiente a quien identificaba como empleador, sin pretender solidaridad de nadie, sin necesidad de vincular a otra persona a la Litis.

Que en todo caso, de entenderse que el Departamento de Antioquia era el responsable de las obligaciones de la Institución Educativa ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIANO OSPINA RODRÍGUEZ, y en una eventual sentencia se le confiriera la calidad de obligado solidario, ello sólo ubicaría a la entidad como un garante del pago de las acreencias laborales ordenadas y en esa medida su vinculación al proceso en ninguna medida podía entenderse como necesaria, toda vez que el mismo podía resolverse sin la asistencia de ese garante o solidario responsable, razón que incluso consideró suficiente para desestimar la excepción analizada.

## **2.2. RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO**

Adujo que formuló la excepción de conformidad con el numeral 9 del art. 100 del CGP según el cual es una medida para encaminar en correcta forma el procedimiento y que en efecto, todas las partes que puedan estar interesadas en el proceso, comparezcan al mismo y tengan iguales oportunidades de defenderse e interponer los medios exceptivos que a bien tengan.

Que tal y como lo afirmó la demandante en su libelo de demanda, prestó servicios a favor de una entidad educativa, Escuela Normal Superior Mariano Ospina Rodríguez en el Municipio de Fredonia – Antioquia, no así en beneficio específicamente de la Institución Universitaria Pascual Bravo, elemento que realmente era relevante dado que los funcionarios de esta última entidad no prestan servicios en dicha entidad educativa, allá sólo se encuentran empleados públicos vinculados con el Departamento de Antioquia.

Que en tal sentido, como la demandante estuvo al servicio de tal ente territorial a través de la institución educativa antes aludida, es dable entender que su actividad provino de unas instrucciones o presuntas órdenes emanadas de algún funcionario del Departamento de Antioquia, ya que los contratos de servicios, que en momento alguno desconocía, plasmaban actividades específicas, sin que fuera dable establecer, en esta etapa temprana del proceso, que hubiese cumplido a cabalidad, y si la actora reclamaba unas acreencias laborales por considerar

que las mismas se derivaron de un verdadero contrato de trabajo y no de un contrato de prestación de servicios, pudo haber mediado situaciones que desnaturalizaban ese último con ocasión de actuaciones de cierto personal, generando órdenes y subordinación continuada que pudiera dar lugar a lo pretendido.

Es por ello que considera que el Departamento de Antioquia tiene una directa responsabilidad dentro de dicho proceso, debiéndose atender la excepción propuesta, toda vez que insiste que el ente departamental realmente se benefició del servicio prestado por la accionante, debiéndose incorporar a la Litis para evitar vacíos y nutrir el debate probatorio, tomándose la mejor determinación en el proceso.

Recalca que en todos los procesos judiciales donde es la institución es demandada, paralelamente esta también demandado el Departamento de Antioquia, incluso curiosamente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, resultó ser este el único condenado.

#### **2.2.1. ALEGATOS PRESENTADOS POR LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO**

Considera que el Departamento de Antioquia debe ostentar la calidad de codemandada, solicitud que expresamente cimenta en los siguientes puntos

1. El Departamento de Antioquia, a través de la Secretaría de Educación, suscribió con nuestra representada sendos contratos interadministrativos, nominados 4600000019 de 2013 y 4600000497 de 2013, cuyo objeto contractual fue en ambos casos, "Apoyo a la prestación del servicio educativo para el normal desarrollo de las actividades operativas de los Establecimientos Educativos oficiales de los municipios no certificados del Departamento de Antioquia, con sus respectivas secciones".
2. En el marco de tales contratos interadministrativos, la señora KATTY ALEJANDRA ÁLVAREZ RESTREPO fue contratada mediante contratos de prestación de servicios para brindar apoyo a la gestión institucional de los municipios no certificados del Departamento de Antioquia.
3. Precisamente en función de aquellos, la demandante prestó sus servicios en la entidad educativa Normal Superior Mariano Ospina Rodríguez del municipio de Fredonia, Antioquia, entidad oficial adscrita al mencionado ente departamental.
4. De ello se colige, que, en razón de la ejecución de los contratos interadministrativos aludidos, y de la subsecuente contratación por prestación de servicios de la demandante, la entidad educativa Normal Superior Mariano Ospina Rodríguez, perteneciente al Departamento de Antioquia, obtuvo un provecho de las actividades desplegadas por quien hoy demanda únicamente a la Institución Universitaria Pascual Bravo, habiendo existido una relación sustancial en la que tuvo un papel protagónico el mencionado ente territorial.
5. Por todo lo expuesto, bajo el entendido de que no ha sido únicamente nuestra representada quien ha estado inmersa en los supuestos de hecho que han dado lugar a este proceso judicial, es claro entonces que el ente territorial también pudo haber sido demandado en este caso, por lo que están también legitimados para ser parte en el

polo pasivo del litigio, y resistir las pretensiones de la demanda, en igualdad de condiciones que la I.U. Pascual Bravo.

6. En tal sentido, y dado que a la Gobernación de Antioquia podrían extenderse los efectos de la sentencia que en este trámite se profiera, es conveniente que sean de recibo las súplicas formuladas en la excepción previa, para que en esta etapa procesal sea integrada al contradictorio, y ejerza su derecho de defensa solicitando la práctica de pruebas, si a bien lo tiene.

#### **SOLICITUD**

En consecuencia, solicito amablemente al Honorable Magistrado, revocar la decisión del Juzgado Décimo Segundo Laboral del Circuito de Medellín, de rechazar la excepción previa de no comprender la demanda a los litisconsortes necesarios, y por lo contrario, acceda a la vinculación de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN – GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, en calidad de codemandada, para que se haga presente en el caso en referencia, y adopte las acciones defensivas que considere pertinentes.

### **3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA**

Consiste en determinar si el Departamento de Antioquia ostenta la calidad de Litis consorte necesario por pasiva.

### **4. CONSIDERACIONES**

En primer lugar, se advierte que es competente esta Corporación para conocer del asunto debatido toda vez que conforme lo disponen los numerales 2º y 3º del artículo 65 del C.P.T y la SS, es apelable el auto que rechace la intervención de terceros o el que decida sobre excepciones previas.

En el presente caso, el conflicto jurídico a resolver consiste en determinar si en virtud de la solicitud elevada por la Institución Universitaria Pascual Bravo, debe llamarse a integrar el contradictorio al Departamento de Antioquia dado que, según lo expuesto en el recurso de alzada, la suscripción de diversos contratos de prestación de servicios con la demandante, respecto de los que se pretende la declaratoria de un contrato realidad, obedecieron al cumplimiento de un convenio interadministrativo con el ente territorial, respecto del cual predica que pudo existir la subordinación que alude la señora Alejandra Álvarez, aunado a que se benefició de la labor ejecutada por esta, intrínsecamente asociándolo a un obligado solidario.

Pues bien, teniendo en cuenta que las normas contenidas en el código que rige el procedimiento laboral no regulan expresamente el asunto ahora debatido, nos debemos remitir a lo que en esta materia prevé el Código General del Proceso; en este sentido pues, se acoge la definición traída

por el art. 61 sobre la figura procesal del litisconsorcio necesario e integración del contradictoria, que en lo que interesa a la Sala reza:

“Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes faltan para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.”

La figura entonces propone para su procedencia que desde el principio de la litis se vislumbre un nexo jurídico que une a varios sujetos por activa, por pasiva o ambos, en un mismo acto o relación material única e indivisible, siendo imperiosa la comparecencia de todos para una mayor claridad en cuanto a los supuestos fácticos y en aras de establecer el grado de responsabilidad que compete a cada uno, garantizando principalmente los derechos al debido proceso y de contradicción, así como una adecuada aplicación de la justicia evitando decisiones inhibitorias.

Postura que ha mantenido de vieja data, véase la sentencia del 14 de junio de 1971, cuando se pronunció sobre este punto precisado:

“...la característica esencial del litisconsorcio necesario es el supuesto de que la sentencia haya de ser única y de idéntico contenido para la pluralidad de partes en la relación jurídico–procesal por ser única la relación material que en ella se controvierte; unicidad ésta que impide hacerle modificaciones que no puedan operar conjuntamente frente a los varios sujetos....”.

Igual pensamiento ya se había plasmado en sentencia del 4 de junio de 1970 al aducir que:

“Como es sabido, la figura procesal del litisconsorcio necesario surge cuando la relación de derecho sustancial sobre el cual ha de pronunciarse el juez, está integrada por una pluralidad de sujetos, bien sea activos o pasivos, en forma tal que no es susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos activos o pasivos individualmente considerados existan, sino que se presentan como una única e indivisible frente al conjunto de tales sujetos. En tal hipótesis, por consiguiente, un pronunciamiento del juez con alcances referidos a la totalidad de la relación no proceder con la intervención única de alguno o algunos de los ligados por aquella, sino necesariamente de todos. Solo estando presente en el respectivo proceso la totalidad de los sujetos activos y pasivos de la relación sustancial, queda debida e íntegramente constituida desde el punto de vista subjetivo la relación jurídico-procesal, y por lo mismo, solo cuando las cosas son así podrá el juez hacer un pronunciamiento de fondo demandado. En caso contrario deberá limitarse a proferir fallo inhibitorio.”

Por otro lado, otros doctrinantes relacionan que esta figura procesal se encuentra regida por dos principios: el de dispositividad y el de legitimación, y los expresan de la siguiente manera:

“La compaginación de los dos principios enunciados, arroja el simple resultado: en las relaciones sustantivas, jurídicamente una con sujeto múltiple, cuando la ley no dispone de otra cosa, es siempre lícito obrar por si solo, sea para demandar o para resistir a la pretensión, y solamente en el caso de que el proceso tenga por fin, la sentencia constitutiva o modificativa o extintiva y tal vez hasta la mero declarativa siendo entonces un proceso definitorio, el principio de la legitimación, como exigencia de conformidad de la pretensión procesal con la manera de ser plural-única o compleja única, predomina sobre el de la libertad y tiene que conformarse la pretensión o la resistencia con la integración de la parte mancomunada: la presencia de todos los varios uno, simultáneamente: la comunidad, la sociedad, el matrimonio, la filiación, la deliberación, la propiedad, son relaciones que no pueden cesar o mortificarse, sino con respecto a todos sus titulares.”<sup>1</sup>

Otros autores definen reglas sencillas para identificar cuando estamos antes un Litis consorcio necesario, así

“Existen ocasiones en las cuales es necesario citar a determinado sujeto de derecho a un proceso, so pena de que si así no ocurre pueda afectarse la actuación de nulidad, tal como acontece precisamente con el litisconsorcio necesario...”

Cuando la presencia de pluralidad de personas demandantes o demandadas no es requisito necesario para la debida integración del contradictorio por tratarse de relaciones jurídicas e independientes, pero por razones de conveniencia o economía procesal se permite la definición de ellas en un solo proceso, estamos frente al litisconsorcio facultativo que, como su nombre lo indica, se integra de acuerdo con el querer del sujeto de derecho autorizado para conformarlo, porque al juez no le está permitido hacerlo.

(...) Se observa en las hipótesis anteriores que la integración del litisconsorcio facultativo obedece de manera exclusiva a la voluntad de quien va a demandar, pues no es viable integrar al mismo, por el querer de quien podría tener la calidad de demandado por no ser posible que un sujeto se presente para que se le tenga como demandado, en otros términos, surge el mismo del acto procesal de la demanda.

(...) por la naturaleza de la obligación solidaria esta se extingue si uno de los deudores paga o si se paga a uno de los acreedores y si existe controversia jurídica respecto de ella, lo que el juez decida será aplicable tanto a quienes como deudores o acreedores solidarios intervinieron en el proceso, como a quienes no lo hicieron, sin que sea forzosa la citación de todos ellos, precisamente por la alternativa consagrada en la disposición sustancial y sin que el juez pueda obligar a la integración de la parte con quienes no fueron citados, ni poderse hacer tampoco por petición de quien fue vinculado como parte, porque en este caso lo máximo que este podría hacer es el llamamiento en garantía, que tiene un alcance diferente como más adelante se analiza.

Basta mencionar, entonces, que el Litis consorcio cuasi necesario surge de figuras del derecho privado como la solidaridad.”<sup>2</sup>

Así mismo en sentencia del 24 de junio de 1999, radicación 11862, reiterada en casación del 21 de febrero de 2006, radicación 24954, se dijo:

<sup>1</sup> Quintero, Beatriz y Prieto Eugenio, “Teoría General del Proceso”, Editorial Temis SA, Tercera Edición, Bogotá Colombia, 2000. Pág. 395.

<sup>2</sup> López Blanco, Hernán Fabio, “Código General del Proceso Parte General”, Editorial DUPRE Editores, Primera Edición, Bogotá Colombia, 2016. Pág. 362 -369.



“Acorde con lo que establecen los textos mencionados, los cuales son aplicables en los juicios del trabajo a falta de norma específica sobre el tema en el C.P.L., la exigencia de conformar el litisconsorcio obedece en primer término a la naturaleza de la relación jurídica sustancial que da lugar al litigio o, en segundo lugar, a que la ley en forma expresa y en precisos casos imponga su integración.

Ahora bien, se hace indispensable la integración de parte plural en atención a la índole de la relación sustancial, cuando ella está conformada por un conjunto de sujetos, bien sea en posición activa o pasiva, en modo tal que no sea "... susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos activos o pasivos individualmente considerados existan sino que se presenta como una sola, única e indivisible frente al conjunto de tales sujetos. En tal hipótesis, por consiguiente un pronunciamiento del juez con alcances referidos a la totalidad de la relación no puede proceder con la intervención única de alguno o algunos de los ligados por aquella, sino necesariamente con la de todos. Sólo estando presente en el respectivo juicio la totalidad de los sujetos activos y pasivos de la relación sustancial, queda debida e íntegramente constituida desde el punto de vista subjetivo la relación jurídico-procesal, y por lo tanto sólo cuando las cosas son así podrá el Juez hacer el pronunciamiento de fondo demandado. En caso contrario, deberá limitarse a proferir el fallo inhibitorio..."

Es decir, la figura del litis consorcio necesario se define como la obligatoriedad de vincular a las todas las personas a las que les afecte directamente las resultas de una sentencia, pues comparten entre sí un derecho sustancial que no puede ser dividido o escindido. Y que sin la comparecencia de las personas necesarias no se puede proferir sentencia. En este términos razonó nuestro órgano de cierre mediante sentencia de radicación 59.027 de 2015 al referirse a la norma antes transcrita, indicó que:

“(...) lo que permite advertir que tal predicamento corresponde no a las afirmaciones del demandante en su escrito de demanda, sino, cosa distinta, a la naturaleza de la cuestión litigada en el proceso, de suerte que no porque el demandante plantee una particular postura de sus demandados frente a la pretensión del proceso, ellos adquieren ipso facto la calidad de litisconsortes necesarios, sino que es en atención a la cuestión que allí haya de definirse que se desprende o define esa peculiar calidad de litis consortes necesarios.

En otras palabras, el litisconsorcio debe tenerse por necesario cuando no fuere posible dictarse la sentencia si no es en presencia de todos quienes conforman la relación jurídica sustancial controvertida en el proceso, pues de resultar excluido alguno o algunos de quienes debieran quedar afectados por ella, ésta no estaría llamada a lograr su eficacia, con lo cual no adquirirá las características de inmutabilidad y definitividad propias a su firmeza, dado que frente a aquél o aquéllos no contará con oponibilidad alguna (...).”

Conforme lo expuesto y en consideración al asunto debatido, a juicio de esta Magistratura NO se está en presencia de un litis consorcio necesario, NO se vislumbra NINGUNA situación que impida al operador jurídico resolver el fondo del proceso y decidir sobre las pretensiones formuladas por la parte actora, la que pretende el reconocimiento de una relación laboral única y exclusivamente respecto de la institución universitaria demandada, y en todo caso, si de la prueba recaudada, en gracia de discusión, se desprendiese que otro es el empleador, dicho riesgo ha de asumirlo la demandante quien en el libre ejercicio del derecho de acción, NO la direccionó correctamente, aspectos que en todo caso deberán ser analizados al proferir sentencia.

Y es que conforme lo destacó el a quo, la parte actora es quien propone la acción, invocando unos fundamentos de derecho en los cuales soporta la situación fáctica, para el caso, como se dijo, tendiente a la declaratoria de su calidad de trabajadora oficial al entender que medió un contrato de trabajo del cual pretende obtener de manera principal, entre otras, el reintegro o el reconocimiento y pago de sendas acreencias e indemnizaciones, por tanto, de producirse una condena al tener el derecho o una absolucón por no tenerlo, a quien le incumbe o afecta directamente la participación de ese tercero en el proceso, realmente es a la parte actora, no así al recurrente, es decir, de existir una obligación en cabeza del Departamento de Antioquia, su NO vinculación en nada afecta la validez de la sentencia, en otras palabras, su presencia no es condicionante para ello, el juez puede pronunciarse en torno a la existencia o no del aludido vínculo cuya naturaleza, a voces de la parte actora, es laboral.

Ello NO implica la imposibilidad de convocar desde el inicio al ente territorial pero sólo si a bien lo tienen la demandante y así enfoca la acción, soportando tal vínculo en hechos de los cuales se desprenderán unas pretensiones, determinando su grado de responsabilidad, pero no es éste el caso pues no lo quiso así la proponente al activar la jurisdicción, implicando ello que no puede obligárseles a re-direccionar sus pretensiones o a cambiar la intención litigiosa, incorporando un nuevo sujeto procesal por pasiva que no considera su deudor, renunciando voluntariamente a la posibilidad de vincularlo. Otra cosa es que tras el debate probatorio, eventualmente de las consideraciones del fallador se desprenda una posible responsabilidad solidaria por parte del Departamento, situación que más bien lo ubicaría como un Litis consorte cuasi necesario, pero ello no implica su obligatoria comparecencia al proceso precisamente porque no es un indispensable para proferir sentencia, no hay una relación inescindible de cara al derecho sustancial que se debate dada la naturaleza de las relaciones jurídicas objeto del litigio, tampoco su ausencia equivale a una nulidad de la actuación, es decir, NO afecta la validez de la sentencia.

En consecuencia, habrá de confirmarse la decisión objeto del recurso de alzada, pues bajo el panorama descrito, el Departamento de Antioquia NO ostenta la calidad de Litis consorte necesario por pasiva.

Se condenará en costas en esta instancia a la demandada por no haber tenido éxito en el recurso. Se fijarán como agencias en derecho la suma de \$908.526.

## **5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL**

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**


**PRIMERO: CONFIRMA** la decisión proferida el 27 de agosto de 2019 por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín mediante la cual negó la vinculación a la Litis del Departamento de Antioquia, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora **KATTY ALEJANDRA ÁLVAREZ RESTREPO** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 43.412.803 contra la **INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO**, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.


**SEGUNDO:** costas en esta instancia a cargo de la demandada. Se fija como agencias en derecho la suma de \$908.526.

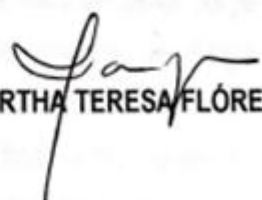
Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

(Firmas escaneadas)

Los Magistrados,

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**

**CERTIFICO:** Que la providencia anterior fue notificada por  
**ESTADOS** No. 103 fijados hoy en la secretaría de  
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 16 DE JUNIO DE 2021

\_\_\_\_\_  
**Secretario**

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>